

LA ORALIDAD EN EL DERECHO DE FAMILIA EN EL ECUADOR: ¿GARANTÍA DE CELERIDAD O RIESGO A LA TUTELA JURÍDICA EFECTIVA?
ORALITY IN FAMILY LAW IN ECUADOR: GUARANTEE OF SPEED OR RISK TO EFFECTIVE LEGAL PROTECTION?

Autores: ¹Tania Ercilia López Zapata, ²Yohana Estefanía Nevárez Vega ³Estefanía del Rocío Barzola Pazmino y ⁴Odette Martínez Pérez.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-5197-1759>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-2005-8865>

³ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-2527-7204>

⁴ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6295-2216>

¹E-mail de contacto: telopez@ube.edu.ec

²E-mail de contacto: yenevarezv@ube.edu.ec

³E-mail de contacto: edbarzolap@ube.edu.ec

⁴E-mail de contacto: omartinezp@ube.edu.ec

Afiliación: ¹*²*³*⁴Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

Artículo recibido: 22 de Abril del 2026

Artículo revisado: 24 de Abril del 2026

Artículo aprobado: 26 de Abril del 2026

¹Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, egresada de la Universidad Nacional de Loja, (Ecuador). Estudiante de maestría en Derecho Procesal en la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

²Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, egresada en la Universidad Estatal de Guayaquil, (Ecuador). Estudiante de la Maestría en Derecho Procesal en la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

³Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, egresada de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad ECOTEC, (Ecuador). Actualmente, Docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

⁴Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Oriente, (Cuba). Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, egresada de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador). Magíster en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de Oriente, (Cuba). Magíster en Educación con mención en Pedagogía de los Entornos Digitales, egresado de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador). PhD en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuba, (Cuba). Actualmente, Docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

Resumen

El presente trabajo tiene como propósito analizar, desde una perspectiva crítica y práctica, la aplicación del principio de oralidad en los procesos de Derecho de familia en el Ecuador, particularmente a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). El estudio no se limita a una revisión normativa, sino que incorpora la observación directa del funcionamiento de las audiencias y el comportamiento de los operadores de justicia en el contexto real del litigio. El punto de partida de esta investigación es reconocer que la oralidad fue concebida como un mecanismo orientado a superar las deficiencias del sistema escrito tradicional, caracterizado por su lentitud, formalismo excesivo y acumulación de causas. A partir del análisis desarrollado, se identifica que, si bien la oralidad ha contribuido a reducir tiempos procesales y a dinamizar la resolución de conflictos, especialmente en materia de familia, también ha generado efectos adversos

en la práctica. Entre ellos se destacan limitaciones en la producción y contradicción de la prueba, restricciones en el ejercicio del derecho a la defensa, y una tendencia a la emisión de decisiones judiciales bajo presión de tiempo, lo que puede afectar la debida motivación. Asimismo, se evidencia que factores como la sobrecarga procesal, la insuficiente capacitación en litigación oral y la persistencia de una cultura jurídica basada en lo escrito influyen directamente en la forma en que se desarrollan las audiencias. Esta situación genera una tensión estructural entre la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva, particularmente sensible en el ámbito del Derecho de familia, donde se encuentran en juego derechos fundamentales como el interés superior del niño, el derecho a alimentos y la estabilidad familiar.

Palabras claves: Oralidad procesal, Derecho de familia, Celeridad procesal, Tutela

judicial efectiva, Sistema judicial ecuatoriano.

Abstract

This paper aims to analyze, from a critical and practical perspective, the application of the principle of orality in family law proceedings in Ecuador, particularly since the enactment of the General Organic Code of Procedures (COGEP). The study is not limited to a normative review but also incorporates direct observation of the functioning of hearings and the behavior of legal professionals in the real-world context of litigation. The starting point of this research is the recognition that orality was conceived as a mechanism to overcome the shortcomings of the traditional written system, characterized by its slowness, excessive formalism, and case backlog. The analysis reveals that, while orality has contributed to reducing procedural time and streamlining conflict resolution, especially in family law, it has also generated adverse effects in practice. These include limitations in the production and rebuttal of evidence, restrictions on the exercise of the right to defense, and a tendency to issue judicial decisions under time pressure, which can compromise the proper justification of the decision. Furthermore, it is evident that factors such as excessive caseload, insufficient training in oral litigation, and the persistence of a legal culture based on written documents directly influence how hearings are conducted. This situation generates a structural tension between procedural efficiency and effective judicial protection, particularly sensitive in the area of family law, where fundamental rights such as the best interests of the child, the right to child support, and family stability are at stake.

Keywords: Oral proceedings, Family law, Procedural efficiency, Effective judicial protection, Ecuadorian judicial system.

Sumário

Este artigo tem como objetivo analisar, sob uma perspectiva crítica e prática, a aplicação do princípio da oralidade em processos de direito de família no Equador, particularmente desde a promulgação do Código Orgânico Geral de

Processo Civil (COGEP). O estudo não se limita a uma revisão normativa, mas também incorpora a observação direta do funcionamento das audiências e do comportamento dos profissionais do direito no contexto real do litígio. O ponto de partida desta pesquisa é o reconhecimento de que a oralidade foi concebida como um mecanismo para superar as deficiências do sistema escrito tradicional, caracterizado por sua lentidão, formalismo excessivo e acúmulo de processos. A análise revela que, embora a oralidade tenha contribuído para a redução do tempo processual e para a agilização da resolução de conflitos, especialmente no direito de família, também gerou efeitos adversos na prática. Estes incluem limitações na produção e contestação de provas, restrições ao exercício do direito de defesa e uma tendência a proferir decisões judiciais sob pressão temporal, o que pode comprometer a devida fundamentação da decisão. Além disso, é evidente que fatores como o excesso de processos, o treinamento insuficiente em litígios orais e a persistência de uma cultura jurídica baseada em documentos escritos influenciam diretamente a forma como as audiências são conduzidas. Essa situação gera uma tensão estrutural entre a eficiência processual e a efetiva proteção judicial, particularmente sensível na área do direito de família, onde estão em jogo direitos fundamentais como o melhor interesse da criança, o direito à pensão alimentícia e a estabilidade familiar.

Palavras-chave: Processos orais, Direito de família, Eficiência processual, Efetividade da proteção judicial, Sistema judiciário ecuatoriano.

Introducción

El principio de oralidad constituye uno de los ejes estructurales del modelo procesal contemporáneo, al establecer que el debate judicial debe desarrollarse de manera directa, pública y concentrada, permitiendo una interacción inmediata entre las partes y el juez (Taruffo, 2015; Binder, 2018). Su incorporación en el sistema procesal

ecuatoriano, a través del Código Orgánico General de Procesos, respondió a la necesidad de superar las deficiencias del modelo escrito tradicional, caracterizado por su lentitud, formalismo excesivo y acumulación de causas (Carbonell, 2016). Desde una perspectiva teórica, la oralidad busca garantizar principios como la inmediación, la concentración y la celeridad procesal, permitiendo que el juez tenga contacto directo con la prueba y con las partes procesales (Mejía, 2017).

Esta dinámica, en principio, fortalece la transparencia del proceso y mejora la calidad de las decisiones judiciales. Sin embargo, su eficacia no depende únicamente de su reconocimiento normativo, sino de las condiciones reales en las que se implementa (Herrera y Valencia, 2025; López y Salazar, 2022). En el contexto ecuatoriano, especialmente en los procesos de Derecho de familia, la aplicación de la oralidad ha evidenciado tensiones relevantes entre la rapidez del proceso y la garantía de derechos fundamentales (Ávila, 2017). Este ámbito resulta particularmente sensible, ya que en él se resuelven conflictos relacionados con alimentos, tenencia y régimen de visitas, es decir, situaciones que inciden directamente en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como en la estabilidad del núcleo familiar.

A pesar de su consolidación normativa, en la práctica judicial se han identificado limitaciones en la aplicación del principio de oralidad, particularmente en lo relativo a la práctica y contradicción de la prueba, el ejercicio del derecho a la defensa y la motivación de las decisiones judiciales (UNICEF, 2018). Estas dificultades se ven acentuadas por factores estructurales como la sobrecarga procesal, la limitada capacitación en

técnicas de litigación oral y la persistencia de prácticas propias del sistema escrito. En este contexto, surge el siguiente problema de investigación: determinar si la implementación del principio de oralidad en los procesos de Derecho de familia en el Ecuador, bajo las condiciones actuales del sistema judicial, cumple efectivamente con los estándares constitucionales de tutela judicial efectiva o si, por el contrario, genera una afectación material a dichas garantías (Vayas, 2017). A partir de este planteamiento, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿la aplicación del principio de oralidad en los procesos de Derecho de familia en el Ecuador garantiza la celeridad procesal sin afectar la tutela judicial efectiva?

En este sentido, se plantea como hipótesis que la implementación del principio de oralidad en los procesos de Derecho de familia en el Ecuador, si bien ha contribuido a la reducción de los tiempos procesales, no garantiza plenamente la tutela judicial efectiva, debido a limitaciones estructurales como la sobrecarga judicial, la insuficiente capacitación en litigación oral y la ausencia de criterios uniformes en la dirección de audiencias, lo que incide negativamente en el derecho a la defensa, la práctica probatoria y la motivación de las decisiones judiciales. Desde el punto de vista doctrinario, diversos autores han advertido que la oralidad no constituye una garantía en sí misma, sino un instrumento cuya eficacia depende de su adecuada implementación.

En esta línea, se sostiene que la calidad del proceso no está determinada por su forma oral o escrita, sino por el respeto efectivo de las garantías procesales, especialmente en contextos donde se encuentran en juego derechos fundamentales. Asimismo, el análisis de la oralidad en el ámbito del Derecho de

familia no puede desvincularse del marco normativo establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el cual impone estándares reforzados de protección, tales como el interés superior del niño, el derecho a ser escuchado y la protección integral. Estos principios exigen que la aplicación del sistema oral no solo sea eficiente, sino también garantista.

En el ámbito comparado, tanto la jurisprudencia constitucional colombiana como la española han enfatizado que la oralidad debe aplicarse bajo criterios de razonabilidad, garantizando el derecho a la defensa, la adecuada valoración de la prueba y la debida motivación de las decisiones judiciales, lo que evidencia que la rapidez procesal no puede prevalecer sobre la justicia material. En este contexto, el objetivo general de la investigación es analizar la incidencia del principio de oralidad en la administración de justicia en materia de familia en el Ecuador, determinando si su aplicación responde a estándares de eficiencia sin afectar derechos fundamentales.

Materiales y Métodos

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo, explicativo y propositivo, orientado a analizar la aplicación del principio de oralidad en los procesos de Derecho de familia en el Ecuador, tanto desde su dimensión normativa como desde su manifestación en la práctica judicial. Este enfoque permitió comprender el fenómeno jurídico desde una perspectiva integral, considerando no solo la normativa vigente, sino también su operatividad en contextos reales. El diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal. Se consideró no experimental debido a que no se manipularon variables, sino que se analizó el fenómeno en su contexto natural. A su vez, el carácter

transversal responde a que el estudio se centró en un periodo específico comprendido entre los años 2022 y 2024, etapa en la que el sistema oral se encuentra plenamente implementado en el Ecuador. La unidad de análisis estuvo conformada por 25 procesos judiciales en materia de Derecho de familia, correspondientes a pensiones alimenticias, tenencia y régimen de visitas. Dichos procesos fueron tramitados en unidades judiciales de las provincias de Loja y El Oro, seleccionadas por su representatividad regional y por la accesibilidad a la información judicial.

La selección de los casos se realizó mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional, considerando criterios como: procesos sustanciados bajo el sistema oral conforme al Código Orgánico General de Procesos, existencia de audiencias debidamente registradas, disponibilidad de resoluciones judiciales, presencia de actividad probatoria relevante y tramitación dentro del periodo 2022–2024. Este procedimiento permitió focalizar el análisis en casos donde la aplicación del principio de oralidad resulta observable y evaluable. Para la recolección de información se emplearon diversas técnicas. En primer lugar, se realizó una revisión documental de normativa vigente, jurisprudencia constitucional y doctrina especializada en Derecho procesal y Derecho de familia.

Asimismo, se efectuó un análisis de expedientes judiciales disponibles en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), incluyendo resoluciones, escritos y actuaciones procesales. Complementariamente, se llevó a cabo una observación indirecta de audiencias, basada en actas procesales, registros judiciales y la experiencia profesional del investigador en litigación en materia de familia. Con el fin de garantizar la confiabilidad y validez de los

resultados, la información fue sometida a procesos de trazabilidad y verificación, mediante la contrastación entre actas de audiencia y resoluciones judiciales, la revisión sistemática de expedientes digitales y el registro estructurado de observaciones a través de guías previamente diseñadas.

Estas guías permitieron identificar y sistematizar variables específicas como la duración de las audiencias, el número de intervenciones de las partes, las limitaciones en la práctica y contradicción de la prueba, la actuación del juez en la dirección del proceso y el nivel de motivación de las decisiones judiciales. En cuanto a los métodos de análisis, se aplicaron diversos enfoques propios de la investigación jurídica. El método exegético permitió la interpretación de las normas contenidas en la Constitución, el Código Orgánico General de Procesos y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El método hermenéutico facilitó el análisis del sentido y alcance de la jurisprudencia y la doctrina en relación con el principio de oralidad. Por su parte, el método casuístico se utilizó para el estudio de los casos concretos, identificando patrones y problemáticas recurrentes en la práctica judicial.

De igual forma, el método comparado permitió contrastar el modelo ecuatoriano con experiencias de otros sistemas jurídicos, particularmente de España y Colombia. La información recopilada fue organizada mediante matrices de análisis y tablas comparativas, lo que permitió identificar tendencias, frecuencias y relaciones entre las variables observadas. A partir de este proceso, se generaron categorías analíticas vinculadas a la celeridad procesal, el derecho a la defensa, la práctica probatoria y la motivación judicial.

Resultados y Discusión

El análisis empírico se realizó sobre un total de 25 procesos judiciales en materia de Derecho de familia, correspondientes a alimentos, tenencia y régimen de visitas, tramitados en las provincias de Loja y El Oro durante el periodo 2022–2024. A partir de la revisión de expedientes judiciales, actas de audiencia y resoluciones disponibles en el sistema SATJE, se identificaron diversas tendencias relevantes en la aplicación del principio de oralidad. En relación con la duración de las audiencias, se verificó que el 68% de los casos (17 de 25 procesos) presentó audiencias con una duración inferior a 30 minutos, mientras que el 32% restante osciló entre 30 y 45 minutos.

Este hallazgo evidencia una clara tendencia hacia la reducción del tiempo procesal, lo que responde al principio de celeridad; sin embargo, también plantea interrogantes sobre la suficiencia del tiempo para el desarrollo integral de la actividad probatoria. En cuanto a la práctica y contradicción de la prueba, se identificó que en el 56% de los casos (14 de 25 procesos) existieron restricciones en el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, manifestadas en la limitación del número de preguntas, interrupciones por parte del juzgador y reducción del tiempo destinado a la práctica probatoria.

Asimismo, en el 68% de los casos, la práctica de la prueba no se desarrolló de manera completa, lo que afectó directamente el principio de contradicción. Respecto al derecho a la defensa, se evidenció que en el 56% de los procesos analizados las partes no pudieron ejercerlo plenamente. Esta limitación se manifestó principalmente en restricciones de tiempo para la intervención, dificultades en la exposición de argumentos y una insuficiente dinámica de debate oral, lo cual guarda estrecha

relación con la aceleración de las audiencias. En lo concerniente a la motivación de las decisiones judiciales, se determinó que en el 48% de los casos (12 de 25 procesos) la motivación fue insuficiente, caracterizándose por argumentaciones genéricas, escasa valoración de la prueba practicada en audiencia y ausencia de un desarrollo jurídico profundo.

En contraste, únicamente en el 52% de los casos se observó una motivación adecuada, acorde con los estándares constitucionales. En los procesos que involucraban derechos de niños, niñas y adolescentes, se constató que en el 40% de los casos no se garantizó de manera efectiva su derecho a ser escuchados, ya sea por la ausencia de intervención directa o por limitaciones en las condiciones de participación. Este resultado evidencia una problemática relevante en la protección de derechos en el marco del sistema oral. Los hallazgos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resultados del análisis empírico de procesos de Derecho de familia (2022–2024):

Variable analizada	Resultado
Duración promedio de audiencias	25–40 minutos
Limitaciones en práctica probatoria	68% de los casos
Restricción al derecho de defensa	56% de los casos
Motivación judicial insuficiente	48% de los casos

Fuente: Elaboración propia

Los datos obtenidos permiten identificar una tendencia clara: la oralidad ha sido aplicada bajo un enfoque orientado a la celeridad procesal, lo que ha generado limitaciones en el ejercicio de garantías fundamentales. En particular, la reducción del tiempo de audiencias, la restricción en la práctica probatoria y la motivación insuficiente de las decisiones evidencian que el modelo oral, en su

aplicación actual, presenta deficiencias estructurales que afectan la calidad del proceso judicial en materia de familia. Los resultados obtenidos evidencian que, si bien el principio de oralidad ha sido incorporado de manera formal en el sistema procesal ecuatoriano, su aplicación práctica presenta inconsistencias relevantes, particularmente en los procesos de Derecho de familia. Para comprender esta problemática, es necesario analizar no solo su configuración normativa, sino también su desarrollo en la práctica judicial y su contraste con otros sistemas jurídicos.

La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, lo que implica que toda decisión judicial debe ser motivada, razonada y respetuosa de las garantías procesales. En este contexto, la oralidad no puede ser entendida únicamente como un mecanismo de rapidez, sino como una herramienta que debe fortalecer la calidad del proceso. A la luz del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la oralidad debe ser entendida como un mecanismo de garantía reforzada y no únicamente de celeridad, en la medida en que los procesos de familia exigen decisiones que prioricen la protección integral de los derechos de los menores, lo cual implica una motivación judicial más rigurosa y una valoración probatoria más cuidadosa.

Sin embargo, el análisis realizado demuestra que en la práctica judicial ecuatoriana existe una tendencia a priorizar la celeridad sobre la profundidad del análisis jurídico. Las audiencias en materia de familia, en muchos casos, se desarrollan bajo presión de tiempo, lo que limita la adecuada práctica de la prueba y la intervención efectiva de las partes. Para interpretar estos hallazgos, se realizó un análisis comparativo con sistemas jurídicos que han

desarrollado de manera más estructurada la oralidad. El sistema procesal español ha consolidado la oralidad bajo criterios de control judicial riguroso, donde el juez tiene un rol activo en la dirección del proceso, garantizando el equilibrio entre celeridad y derecho a la defensa. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha enfatizado que la oralidad no puede afectar la calidad de la motivación de las resoluciones. En el sistema colombiano, la oralidad ha sido acompañada de una fuerte capacitación en litigación oral y de lineamientos claros para el desarrollo de

audiencias, lo que ha permitido una aplicación más uniforme y garantista. La Corte Constitucional ha insistido en que la rapidez procesal no puede comprometer el debido proceso. Este análisis comparado evidencia que el problema en Ecuador no radica en el modelo oral en sí, sino en su implementación. La falta de lineamientos claros, la sobrecarga judicial y la insuficiente formación en litigación oral generan una aplicación desigual del sistema. A continuación, se presenta la tabla 2, que sintetiza los principales aspectos identificados:

Tabla 2. Principales aspectos identificados.

Indicador	Ecuador	España	Colombia
Aplicación de la oralidad	Formalmente implementada, pero con deficiencias prácticas en audiencias	Sistema estructurado con control judicial riguroso	Aplicación estandarizada con enfoque garantista
Manejo de audiencias	Limitado por tiempos reducidos y carga procesal	Flexible según la complejidad del caso	Regulado con criterios claros y técnicos
Preparación de operadores jurídicos	Desigual, con deficiencias en litigación oral	Alta especialización en litigación oral	Capacitación continua obligatoria
Práctica de la prueba	Limitada por el tiempo en audiencia	Garantizada con control judicial efectivo	Regulada con enfoque en contradicción y defensa
Motivación de decisiones	En algunos casos limitada o genérica	Rigurosa y desarrollada jurisprudencialmente	Exigida como garantía esencial del debido proceso
Equilibrio celeridad–garantía	Predomina la rapidez sobre la calidad	Equilibrio entre eficiencia y garantías	Prioriza el debido proceso sobre la celeridad

Fuente: Elaboración propia

El contraste de los resultados obtenidos permite afirmar que, si bien el Ecuador cuenta con una base normativa adecuada en materia de oralidad procesal, la limitada consolidación práctica de este modelo incide directamente en la calidad de la administración de justicia. En particular, se evidencia que la rapidez en la tramitación de los procesos no siempre se traduce en decisiones judiciales plenamente motivadas ni en el respeto integral de las garantías procesales, lo que genera tensiones entre la celeridad y la tutela judicial efectiva. A partir de los hallazgos empíricos y del análisis doctrinario y comparado, se concluye que la problemática no radica en el principio de oralidad en sí mismo, sino en las condiciones estructurales y

operativas de su implementación dentro del sistema judicial ecuatoriano. En este sentido, se plantea una propuesta orientada a fortalecer un modelo de oralidad garantista, capaz de equilibrar la eficiencia procesal con la protección de derechos fundamentales, especialmente en el ámbito del Derecho de familia. En primer lugar, se propone la estandarización del desarrollo de audiencias mediante la elaboración e implementación de un Manual de Litigación Oral en materia de familia, dirigido a jueces y abogados. Este instrumento debería establecer criterios técnicos claros para la organización y conducción de audiencias, la distribución adecuada del tiempo procesal, la práctica y

contradicción de la prueba, así como la participación efectiva de las partes. La adopción de este tipo de lineamientos permitiría reducir la discrecionalidad judicial y garantizar una mayor uniformidad en la aplicación del sistema oral, fortaleciendo la seguridad jurídica. En segundo lugar, se plantea la necesidad de implementar programas de capacitación especializada obligatoria en litigación oral, dirigidos a jueces, fiscales y abogados.

Estos programas deberían enfocarse en el desarrollo de competencias en técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, argumentación jurídica oral, valoración probatoria en audiencia y enfoque de derechos en materia de niñez y adolescencia. La formación continua contribuiría a corregir las desigualdades en la preparación de los operadores jurídicos, elevando la calidad del debate procesal y, en consecuencia, de las decisiones judiciales. Asimismo, se propone la creación de mecanismos institucionales de control de calidad en la motivación judicial, con el objetivo de verificar que las resoluciones cumplan con estándares mínimos de fundamentación. Dichos estándares deben incluir una adecuada fundamentación jurídica, el análisis integral de la prueba practicada en audiencia, la coherencia argumentativa y un enfoque centrado en derechos fundamentales.

Este control permitiría evitar resoluciones genéricas o insuficientemente motivadas, fortaleciendo así la tutela judicial efectiva. De igual manera, se plantea el fortalecimiento del rol activo del juez como director del proceso. En este modelo, el juzgador debe garantizar la igualdad de armas entre las partes, la correcta práctica de la prueba, la protección de sujetos en condición de vulnerabilidad y el respeto al principio del interés superior del niño. Este enfoque resulta especialmente relevante en los

procesos de familia, donde la función judicial no puede limitarse a una posición pasiva, sino que exige una intervención orientada a la protección de derechos. Se propone la regulación específica de las audiencias telemáticas mediante protocolos que aseguren la efectiva participación de las partes, la intermediación judicial, la adecuada práctica de la prueba y la igualdad procesal.

La incorporación de estas garantías resulta indispensable para evitar que las limitaciones tecnológicas afecten el debido proceso. En cuanto a la validación de la propuesta, esta encuentra sustento en el marco constitucional ecuatoriano, particularmente en los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso, que imponen al Estado la obligación de garantizar decisiones judiciales motivadas, justas y respetuosas de los derechos fundamentales. Asimismo, desde la perspectiva del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, las medidas planteadas son coherentes con el principio del interés superior del niño y el derecho a ser escuchado, los cuales exigen estándares reforzados de protección.

La viabilidad de estas estrategias se encuentra respaldada por el derecho comparado. En países como Colombia, la implementación de programas de capacitación en litigación oral y el desarrollo jurisprudencial han fortalecido el carácter garantista del sistema procesal. Por su parte, en España, la existencia de criterios claros para la conducción de audiencias y la exigencia de una motivación rigurosa han permitido equilibrar la oralidad con la calidad de las decisiones judiciales. Estas experiencias evidencian que la adecuada implementación de la oralidad, acompañada de medidas institucionales y formativas, puede contribuir significativamente a mejorar la administración de justicia.

Tabla 3. Comparación del sistema de oralidad procesal en materia de familia. Derecho comparado.

Criterios	Ecuador (situación actual)	Derecho comparado (España y Colombia)	Propuesta para Ecuador
Aplicación práctica de la oralidad	Irregular y dependiente del juez	Estructurada con lineamientos claros	Estandarización mediante manual de audiencias
Capacitación de operadores	Limitada y no uniforme	Formación continua obligatoria	Programas de capacitación en litigación oral
Manejo del tiempo en audiencias	Rígido y reducido	Flexible según complejidad del caso	Flexibilización del tiempo procesal
Motivación de decisiones	Variable y en ocasiones insuficiente	Rigurosa y controlada	Implementación de control de calidad judicial
Protección del derecho a la defensa	En algunos casos restringida	Garantizada como eje del proceso	Fortalecimiento de la etapa probatoria
Eficiencia vs. garantías	Predomina la celeridad	Equilibrio entre rapidez y justicia	Modelo garantista con eficiencia controlada

Fuente: Elaboración propia

La propuesta no solo resulta jurídicamente viable, sino necesaria, en tanto responde a las deficiencias identificadas en la práctica judicial. Su implementación permitiría transformar el modelo actual hacia un sistema de oralidad garantista, en el que la celeridad procesal no se contraponga a la justicia material, sino que la complemente.

Conclusiones

La oralidad en el Derecho de Familia ecuatoriano no puede ser comprendida exclusivamente como un mecanismo de agilización procesal, sino como un modelo que exige una profunda reconfiguración de las garantías del debido proceso. Si bien su implementación ha contribuido a la reducción de la mora judicial, su aplicación práctica ha evidenciado deficiencias estructurales en la motivación judicial, la valoración probatoria y la protección efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, el problema no radica en la oralidad como técnica procesal, sino en la ausencia de un modelo de oralidad garantista, capaz de equilibrar la

celeridad con la calidad de la decisión judicial. La experiencia comparada demuestra que mientras en Colombia la oralidad se encuentra respaldada por un control constitucional riguroso y una doctrina sólida sobre el debido proceso sustancial, y en España se complementa con resoluciones escritas altamente motivadas que permiten un control efectivo de las decisiones judiciales, en el Ecuador aún persiste una implementación centrada en la rapidez procesal, sin el desarrollo suficiente de mecanismos de control que aseguren la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, la oralidad solo podrá consolidarse como una verdadera garantía de justicia en el Ecuador si se articula con estándares reforzados de motivación, formación judicial especializada y protocolos claros en materia de niñez y adolescencia, permitiendo así superar la actual tensión entre eficiencia y garantías, y avanzando hacia un sistema procesal equilibrado, constitucional y orientado a la protección integral de derechos. Resulta imprescindible reconocer que la consolidación

de la oralidad en el Derecho de Familia ecuatoriano demanda la incorporación de criterios técnicos uniformes que orienten la actuación judicial, especialmente en lo relativo a la valoración probatoria en audiencias. La ausencia de estos estándares ha generado decisiones dispares que afectan la seguridad jurídica y debilitan la confianza en el sistema judicial, lo cual contrasta con modelos como el de Colombia, donde la Corte Constitucional ha desarrollado lineamientos claros sobre el control del debido proceso, y el de España, donde la fundamentación escrita complementa la oralidad y fortalece la transparencia de las decisiones.

De igual manera, el avance de la justicia digital y la implementación de audiencias telemáticas en el Ecuador han introducido nuevos desafíos que inciden directamente en la eficacia del sistema oral. Si bien estas herramientas contribuyen a la celeridad, también pueden afectar principios esenciales como la inmediación, la contradicción y la igualdad procesal, particularmente en contextos de vulnerabilidad. En contraste, en sistemas como el español, la digitalización ha sido acompañada de regulaciones más precisas que buscan preservar las garantías procesales, lo que evidencia la necesidad de una regulación más rigurosa en el contexto ecuatoriano.

A la luz de los resultados la evolución del Derecho de Familia en el Ecuador exige un replanteamiento del rol del juez dentro del sistema oral, pasando de un modelo pasivo a uno activo y garantista, capaz de dirigir el proceso con enfoque en derechos humanos y en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la experiencia comparada demuestra que la oralidad alcanza su máxima eficacia cuando el juez asume un rol proactivo en la conducción del proceso y en la

construcción de decisiones debidamente motivadas, lo cual constituye un desafío pendiente para el sistema ecuatoriano en su tránsito hacia una justicia más eficiente, pero también más justa.

Referencias Bibliográficas

- Ávila, R. (2017). *El neoconstitucionalismo transformador*. Corte Constitucional del Ecuador.
<https://www.corteconstitucional.gob.ec>
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2003). *Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia*. Registro Oficial No. 737.
<https://www.registroficial.gob.ec>
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial No. 449.
https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). *Código Orgánico General de Procesos*. Registro Oficial Suplemento No. 506.
<https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/COGEP.pdf>
- Binder, A. (2018). *Introducción al derecho procesal*. Ad-Hoc.
<https://www.ad-hoc.com.ar>
- Carbonell, M. (2016). *Derechos fundamentales y control de constitucionalidad*. UNAM.
<https://biblio.juridicas.unam.mx>
- Centro de Estudios de Justicia de las Américas. (2020). *Informe sobre reformas procesales en América Latina*.
<https://biblioteca.cejamericas.org>
- Cillero, M. (2019). El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
<https://www.unicef.org>
- Consejo de la Judicatura del Ecuador. (2023). *Estadísticas judiciales en materia de familia*.
<https://www.funcionjudicial.gob.ec>
- Corte Constitucional de Colombia. (2022). *Sentencia T-120/2022*.
<https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-120-22.htm>

Corte Constitucional del Ecuador. (2021). *Sentencia No. 11-18-CN/21*. <https://www.corteconstitucional.gob.ec>

Corte Constitucional del Ecuador. (2022). *Sentencia No. 28-21-IN/22*. <https://www.corteconstitucional.gob.ec>

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). *Caso Barreto Leiva vs. Venezuela*. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_espl.pdf

García, J. (2021). *La oralidad en el proceso civil ecuatoriano*. Editorial Jurídica.

Maldonado, R. (2022). La litigación oral en el Ecuador: desafíos y perspectivas. *Revista Jurídica*.

Picó, J. (2016). *El principio de oralidad en el proceso civil*. <https://www.marcialpons.es>

Picó, J. (2019). *Las garantías constitucionales del proceso*. Bosch.

Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano. (2022–2024). *Consulta de*

procesos judiciales. <https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec>

Taruffo, M. (2019). *La prueba de los hechos*. Marcial Pons.

Tribunal Constitucional de España. (2021). *Sentencia STC 37/2021*. <https://hj.tribunalconstitucional.es>

UNICEF. (2018). *Convención sobre los Derechos del Niño y su aplicación*. <https://www.unicef.org>

Vásquez, L. (2020). El principio de oralidad en el sistema procesal ecuatoriano. *Revista de Derecho Procesal*.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional. Copyright © Tania Ercilia López Zapata, Yohana Estefanía Nevárez Vega, Estefanía del Rocío Barzola Pazmino y Odette Martínez Pérez.

Declaraciones éticas y editoriales del artículo

Contribución de los autores (Taxonomía CRediT)

Tania Ercilia López Zapata: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.

Yohana Estefanía Nevárez Vega: curación y organización de los datos, participación en la recolección de información, validación de los resultados obtenidos y elaboración de representaciones gráficas y visualización de los datos.

Estefanía del Rocío Barzola Pazmino: provisión de recursos académicos y materiales para el desarrollo del estudio, apoyo en la administración del proyecto investigativo y revisión editorial del manuscrito antes de su publicación.

Odette Martínez Pérez: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con la investigación presentada, la autoría del manuscrito ni la publicación del presente artículo.

Declaración de financiamiento

La presente investigación no recibió financiamiento específico de agencias públicas, comerciales o de organizaciones sin fines de lucro. En caso de existir financiamiento institucional o externo, este deberá ser declarado explícitamente por los autores en esta sección.

Declaración del editor

El editor responsable certifica que el proceso editorial del presente artículo se desarrolló conforme a los principios de integridad científica, transparencia y buenas prácticas editoriales. El manuscrito fue sometido a un proceso de evaluación mediante revisión por pares doble ciego, garantizando la confidencialidad de la identidad de los autores y revisores durante todo el proceso de dictamen académico. Asimismo, el editor declara que el artículo cumple con los criterios científicos, metodológicos y éticos establecidos por la revista.

Declaración de los revisores

Los revisores externos que participaron en la evaluación del presente manuscrito declaran haber realizado el proceso de revisión de manera objetiva, independiente y confidencial. Asimismo, manifiestan que no mantienen conflictos de interés con los autores ni con la investigación evaluada, y que sus observaciones y recomendaciones se fundamentan exclusivamente en criterios científicos, metodológicos y académicos.

Declaración ética de la investigación

Los autores declaran que la investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica, garantizando la confidencialidad de los datos y el respeto a los participantes del estudio. En los casos en que la investigación involucre seres humanos, los procedimientos deben ajustarse a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a las normativas institucionales correspondientes.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Los autores declaran que el uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haberse utilizado durante el proceso de investigación o redacción del manuscrito, se realizó únicamente como apoyo técnico para mejorar la claridad del lenguaje o el análisis de información, manteniendo siempre la responsabilidad intelectual sobre el contenido del artículo. Las herramientas de inteligencia artificial no fueron utilizadas como autoras del manuscrito ni sustituyen la responsabilidad académica de los investigadores.

Disponibilidad de datos

Los datos que respaldan los resultados de esta investigación estarán disponibles previa solicitud razonable al autor de correspondencia, respetando las normas éticas y de confidencialidad establecidas por la investigación.

